



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ELKIN DE JESÚS SALAZAR MONSALVE
Demandados: ACP COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 005 2022 00486 01
Sentencia: S-294

AUTO

En atención a la escritura pública 3368 del 2 de septiembre de 2019 allegada al expediente, en la que se otorga poder general para representar a la ACP COLPENSIONES a la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. CLAUDIA LILIANA VELA, T.P. 123.148 del C. S. de la Judicatura. Y se accede a la sustitución de poder presentada por la referida apoderada, a favor del Dr. MAURICIO LARA GARCIA portador de la T.P. N° 273.006 del C. S. de la Judicatura, a quien se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que la apoderada principal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES,

con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 30 de mayo de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ELKIN DE JESÚS SALAZAR MONSALVE demandó a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM - al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS – administrado, en este caso, por PROTECCIÓN S.A.

Como consecuencia, solicita se condene a PROTECCIÓN S.A. a trasladar al RPM los valores recibidos con motivo de la afiliación, cotizaciones, bonos pensionales, sumas de las aseguradoras, con todos sus frutos, rendimientos, intereses y gastos de administración; a Colpensiones a validar los aportes en pensiones e incorporarlos a la historia laboral. Además, pretende se condene en costas y agencias a las demandadas.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que fue afiliado el 1º de mayo de 2000 a PROTECCIÓN S.A., pero que dicho fondo omitió la obligación del buen consejo por no brindarle información clara y completa de los beneficios y desventajas de afiliarse al RAIS; que el 17 de noviembre de 2022 solicitó a PROTECCIÓN S.A. información de la pensión y de la aceptación del traslado, sin obtener respuesta; que el 18 de noviembre de 2022 solicitó a COLPENSIONES la aceptación del traslado, la cual no se ha concedido; y que como consecuencia de la

desinformación por parte del RAIS, su calidad de vida se ha visto afectada, por cuanto su mesada sería inferior.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES manifestó que solo admite la solicitud realizada ante Colpensiones y la respuesta dada a la misma; a los demás hechos indicó no le consta por ser ajenos a la entidad. Se opuso a las pretensiones pues carecen de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones de fondo propuso las que denominó carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración, seguros previsionales y comisiones indexados, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. indicó que no es cierto que al momento de la afiliación del demandante no se le brindó por parte de la entidad una asesoría amplia, correcta y clara de todos los aspectos del RAIS; que es cierto que el demandante radicó petición ante PROTECCIÓN y que la misma no ha sido contestada; en cuanto a los demás hechos manifestó que no le constan por referirse a situaciones dadas entre el demandante y otra administradora, o bien que son apreciaciones subjetivas de la parte demandante. Se opuso a las pretensiones, toda vez que es un acto existente, válido y exento de vicios del consentimiento. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, inexistencia de la obligación de devolver comisión de administración y prima de seguros previsionales y aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** la ineficacia de traslado del

demandante del RPM al RAIS a la administradora PROTECCIÓN S.A.; 2) **DECLARÓ** que la afiliación al RPM del demandante no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Pensiones; 3) **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES el 100% de los aportes efectuados por la demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta, incluidos los frutos y rendimientos financieros, las comisiones de administración, valor de las pólizas previsionales, porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, estos debidamente indexados; 4) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir los aportes de PROTECCIÓN S.A. y a tener en cuenta el tiempo cotizado en el RAIS como semanas cotizadas, que deberán reflejarse en su historia laboral; 5) **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A. y se **ABSTUVO** de imponer condena en costas a COLPENSIONES.

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

COLPENSIONES presentó alegatos de conclusión a través de los cuales manifestó que éste no participó en la celebración del contrato de vinculación ni hizo uso de las maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados; que la existencia de vicios en el consentimiento deben ser probados y no simplemente referenciados, es así como en el caso en concreto no se encuentra válidamente acreditado por ningún medio por lo que la ineficacia invocada carece de viabilidad; que la parte actora es una persona plenamente capaz, pues no se acreditó lo contrario, suscribiendo el formulario de forma libre y voluntaria; que la evaluar lo concerniente la carga dinámica de la prueba la jurisprudencia invierte la carga de a prueba en cabeza del

fondo privado, sin que existe un mínimo esfuerzo por parte del demandante, violando así el debido proceso de Colpensiones quien siendo un tercero ajeno debe afrontar la carga de la futura prestación generando un desequilibrio financiero; y que si se deja en firme la sentencia de primera instancia, se debe ordenar a la AFP la devolución de todos los conceptos en razón de la afiliación debidamente indexados.

Por su parte, el apoderado de la **DEMANDANTE** solicitó se confirme la sentencia de primera instancia y que sean trasladados todos los conceptos legales, sin dilaciones y demoras injustificadas.

CONSIDERACIONES:

Se procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, toda vez que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** que el Sr. ELKIN DE JESÚS SALAZAR MONSALVE nació el 24 de noviembre de 1965; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional régimen de prima media en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- y realizó cotizaciones allí desde el 26 de agosto de 1986¹ con un total de 669,57 semanas; **iii)** y que el 9 de marzo de 2000² suscribió formulario de afiliación o traslado ante la AFP PROTECCIÓN S.A, entidad en la que se encuentra actualmente afiliado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada

¹ PDF 4 de la carpeta del Expediente Administrativo N° 10.

² Folio 25 de la Contestación de la demanda de Protección S.A.

en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a*

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 *“ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero”*

una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con

sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que se encontraba laborando para una empresa, cuando los reunieron a todos los empleados y les manifestaron que en razón de que el ISS se iba a acabar los pasarían a la AFP PROTECCIÓN S.A., que esa fue la única información que se les brindó; que el trámite lo realizó la empresa, sin tener ningún contacto con un asesor de la entidad; que posiblemente el formulario se lo entregó la persona encargada de recursos humanos; que no se le dijo nada sobre la información que podía regresar al RPM en determinado tiempo, ni de su estado de cuenta, como tampoco de las condiciones del RAIS, ni mucho menos de las ventajas o desventajas del cambio de régimen.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir

una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció el demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual, junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás

conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Se advierte igualmente que la orden a PROTECCIÓN S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima deben incluir la respectiva indexación, tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá **ADICIONAR** las condenas proferidas a los fondos privados, para ordenarle que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus

respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y ADICIONADA.**

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el día 30 de mayo de 2023, pero se **ADICIONA** en el sentido de **ORDENAR** a PROTECCIÓN S.A. que, al momento de cumplirse la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación del demandante, estos conceptos deben aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Salvamento de voto.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

RADICADO: 05001 31 05 005 2022 00486 01

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO en la sentencia del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

Con el acostumbrado respeto, me permito salvar parcialmente mi voto en la decisión de confirmar totalmente la sentencia del *a quo*, pues si bien comparto la decisión de confirmar la declaratoria de la ineficacia del traslado del demandante del régimen pensional ahorro individual, al de prima media de COLPENSIONES, no comparto en la parte que dispuso ordenar a la AFP PROTECCIÓN S.A., que, por efecto de la ineficacia declarada, le traslade a COLPENSIONES, los aportes del demandante que haya recaudado esta AFP con destino al Fondo de Solidaridad Pensional, por las siguientes razones:

Las pensiones y otras prestaciones que se originen de la afiliación al sistema pensional, se financian con el cien por ciento (100%) de la cotización del respectivo afiliado, sin perjuicio del porcentaje que legalmente se autoriza utilizar en la administración de la afiliación.

Ahora, conforme al Artículo 20 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, los afiliados al sistema pensional que tengan un ingreso mensual, igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, debe realizar un aporte adicional. Esto dispone la citada norma legal *“La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al fondo de solidaridad pensional los recursos correspondientes en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.”*

Por su parte, el literal i) del Artículo 13, de la Ley 100 de 1993, Modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, dispone lo siguiente:

“i) Modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. El fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Créase una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley. La edad para acceder a esta protección será en todo caso tres (3) años inferior a la que rija en el sistema general de pensiones para los afiliados.”

El aporte al referido fondo, es distinto a la cotización que debe realizar el trabajador como su aporte pensional para financiar su pensión con su cuenta individual de ahorro pensiona en el RAIS, o con el aporte al fondo común en el RPM, por lo que, en el evento que las administradoras de pensiones tanto del RPM como del RAIS, hayan recaudado el aporte para el citado Fondo, este no integra el aporte con destino a los fondos de pensiones para financiar la pensión del afiliado, y por ello, ante la declaratoria de ineficacia, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional que posean las AFP de RAIS, no deben ser devueltos a COLPENSIONES, sino consignados en dicho fondo, a órdenes del Ministerio de la Protección Social, quien lo administra.

Y es que ninguna persona y menos la Nación, se puede ver afectada por una decisión judicial, de un proceso que se tramitó sin su conocimiento, en el que no pudo defender sus derechos, por lo que se hacía necesario, que en este caso de oficio, se revisara la legalidad de la sentencia de primera instancia, disponiendo que en el evento que PROTECCIÓN S.A., posea dineros que haya recaudado con destino al referido Fondo, lo consigne en el mismo, a órdenes del Ministerio de la Protección Social, tal como se realiza de oficio, en los casos que se ha ordenado a las AFP devolver a COLPENSIONES, dineros provenientes del bono pensional tipo A, que no se genera ante la declaratoria de ineficacia, disponiendo que al devolución se realice al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

En los anteriores términos, dejo **salvado parcialmente** mi voto en la decisión mayoritaria de confirmar la sentencia de primera instancia, con la orden de que PROTECCIÓN S.A. le entregue a COLPENSIONES, los dineros que haya recaudado con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento Parcial De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8794f960990b2e202c06ccab8acf3bf4d574e33f9994a04dee5f9d4eb276145b**

Documento generado en 20/10/2023 03:52:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>